

PROHIBICIÓN DE PARENTESCO ENTRE ALCALDE Y CONCEJALES


DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11242-06

REFERENCIA	Modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de municipalidades, respecto de la prohibición de parentesco entre el alcalde y los concejales en caso de pertenecer a pueblos indígenas
INICIATIVA	Moción de los diputados Sras. Carvajal y Hernando, y Sres. Arriagada, Espinosa (Marcos), Jiménez, Melo, Meza y Robles
ORIGEN	Cámara de Diputados
COMISIÓN	De Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
INGRESO	18 de mayo de 2017
ARTICULADO	Artículo único

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD


Actualmente, no se aceptan, por impedirlo la ley, que el alcalde sea pariente de alguno de los concejales. Se trata de una norma bien pensada en función de la calidad de fiscalizadores que los concejales tienen respecto de la labor del alcalde.

El proyecto propone permitir el parentesco entre el alcalde y los concejales, cuando se tratare de etnias o pueblos indígenas, dado que en pequeñas comunidades podría haberse producido una situación de estrecho parentesco consanguíneo entre los integrantes del grupo. Ello no permite convenir en la derogación de la prohibición, que, al beneficiar a etnias indígenas, constituye una discriminación que debe calificarse de arbitraria.

Finalmente, la verdadera razón del proyecto de ley, es una situación producida puntualmente en el municipio de Cholchol, donde se eligió a una concejala hermana del alcalde, ambos electos en el mismo proceso electoral, en el 2016 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Autorizar que los alcaldes y concejales puedan tener relación de parentesco, cuando dicha relación se presente entre personas que pertenezcan a una misma etnia o pueblo indígena.

Las relaciones de parentesco que el proyecto permitiría (y que están prohibidas por regla general) se refieren a que los concejales no podrían ser, respecto del alcalde, cónyuge, padre, hijo, adoptado, hermano o cuñado 

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

Uno de los principios fundamentales de la organización política en una democracia, es la igualdad ante la ley, que en nuestra Constitución se manifiesta ya desde el artículo 1° cuando expresa que nacemos libres e “iguales en dignidad y derechos”. Con mayor precisión se señala en el artículo 19 N°2 que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

No toda diferencia es arbitraria y por lo tanto, no toda diferencia vulnera el principio constitucional. Si bien no existe una definición positiva sobre este particular, suele aceptarse que son arbitrarias las diferencias que no se fundan en la naturaleza o en la razón.

Ahora bien, el proyecto incide directamente en el concepto de igualdad ante la ley al establecer una excepción a normas de aplicación general. Corresponderá entonces, determinar si la norma vigente podría ser objeto de una excepción en beneficio de las etnias o pueblos indígenas, sin incurrir en una discriminación arbitraria.

La norma vigente, de aplicación general, tiene por objeto impedir relaciones de parentesco entre un alcalde y los concejales de su misma municipalidad. Esta norma, como se observa, constituye una diferenciación o discriminación porque distingue, para tener la calidad de concejal, entre quienes son y quienes no son parientes del alcalde. Estos últimos pueden ser concejales y los otros no. Pero esta discriminación no es arbitraria sino que está fundada en razonables consideraciones de bien

público tendientes al mejor funcionamiento de los municipios.

Como se sabe, una de las funciones de los concejos municipales es fiscalizar las acciones del alcalde, lo que incluye, en términos amplios, las facultades de administración de la máxima autoridad municipal. Al efecto, el artículo 78 de la ley 18.695, al señalar las atribuciones del concejo, establece que tiene facultad para “fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de quince días” (letra d) de dicho artículo).

La pregunta que, entonces, corresponde formular, es si las relaciones de parentesco constituyen o no un obstáculo al ejercicio de la función fiscalizadora que, dicho sea de paso, es de la mayor importancia en el desarrollo de la labor municipal, al punto de que a la unidad de control que toda municipalidad debe tener, le corresponde “colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras” (artículo 29 letra d) de la ley 18.695).

Tan obvia es la norma que impide al cónyuge del alcalde y otros parientes integrar el concejo municipal, que los autores de la moción se declaran partidarios de la norma, cuyo sentido comprenden cabalmente. ¿En qué podría, entonces, fundamentarse una excepción como la propuesta, en beneficio de las etnias o pueblos indígenas?

La primera motivación que salta a la vista, aunque aparece al final de los fundamentos de la moción, es la situación suscitada en relación a la concejala electa durante las últimas elecciones municipales de 2016 en la comuna de Cholchol, Región de la Araucanía, doña Francisca Huirilef, quien aún obteniendo la primera mayoría de votos – 700 preferencias – está en proceso de destitución “por ser hermana del alcalde de la misma comuna”.

Esta motivación, que no merecería mayor comentario, constituye un ejemplo palmario de la razón para haber establecido la prohibición legal. Precisamente para esos casos la ley adopta resguardos que no obstaculicen la función fiscalizadora del concejo. La razón de la prohibición es válidamente atribuible a cualquier otra relación de parentesco directo entre el alcalde y un concejal de su comuna, cualquiera hubiere sido la votación alcanzada.

Por otra parte, Cholchol es una comuna cuyo municipio elige seis concejales, cifra dentro de cuyo concejo un concejal tiene mayor relevancia que en municipios mayores, de mayor envergadura, en todos los cuales, sin embargo, debe regir la misma prohibición de parentesco.

Hay una segunda motivación presentada por los autores de esta moción, los que señalan que en el caso de municipios de localidades donde, por razones específicas de territorios reducidos, el número de personas que podrían desempeñarse como concejales es limitado y además, se trataría de enclaves étnicos donde a juicio de los autores se podrían presentar algunos casos de endogamia¹, en poblaciones reducidas, lo que a

su juicio explicaría la necesidad de permitir las relaciones de parentesco al interior del concejo municipal.

A este respecto, los autores de la moción se hacen cargo del caso de “la etnia rapanui, quienes residen en una isla y donde la mayoría de sus habitantes se vinculan entre sí por lazos de familia, que por cierto provienen de tiempos ancestrales. O por ejemplo –agregan- en el caso de las comunidades mapuches en el sur de Chile, quienes asimismo presentarían vínculos consanguíneos directos entre sí, que afectan por ende la incorporación de representantes de los distintos pueblos en la palestra política, como ya se hacía mención”.

Este argumento no resulta suficiente dado que, en el caso preciso del municipio de Cholchol, uno de los más pequeños, sufragaron casi seis mil personas para elegir a seis concejales de entre 31 candidatos, sin que se observen otros casos de parentesco con el candidato que resultó electo alcalde Luis Huirilef. Si se aceptara una excepción por razones de interés local en comunidades con posibles casos de endogamia, se abriría un forado al sistema de fiscalización municipal y se generaría el incentivo a buscar, precisamente, candidatos que una vez elegidos como concejales pudieran actuar a favor del alcalde pariente y debilitar por esa vía la necesaria atribución fiscalizadora que con bastante precisión configura el ordenamiento jurídico municipal. Por tanto, no se vislumbran argumentos que permitan sostener la conveniencia de aprobar una norma de las características propuestas ■■■

¹ “Contraer matrimonio personas de ascendencia común o naturales de una pequeña localidad o comarca” (Diccionario RAE).

V. **TEXTO DEL** PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifíquese el artículo 75 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, incorporando un inciso 2° a su letra c).

“La prohibición anterior no se aplica a quienes pertenezcan a una etnia o pueblo indígena reconocido por el Estado”².



² La letra c) quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 75.- Los cargos de concejales serán incompatibles con los de miembro de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, así como con las funciones públicas señaladas en las letras a) [ministros de Estado y otros] y b) [Poder Judicial y otros organismos] del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en que ella participe.

Tampoco podrán desempeñar el cargo de concejal:

c) Los que tengan, respecto del alcalde de la misma municipalidad, la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad inclusive.

La prohibición anterior no se aplica a quienes pertenezcan a una etnia o pueblo indígena reconocido por el Estado.